



Pablo Valenzuela M.

Socio y director de
Territorio Común



Royalty minero: sin participación no hay transformación

El royalty minero ya está en marcha. Más de \$93 mil millones fueron transferidos en su primer ciclo, en 2024, a 307 comunas. El viernes pasado, el Presidente Boric, en Catemu, anunció que este 2025 se van a distribuir 218.625 millones de pesos a 308 comunas, beneficiando a más de 12 millones de personas. Es una política ambiciosa: redistribuir riqueza desde la gran minería hacia territorios históricamente postergados. Pero su éxito no se medirá solo por los montos repartidos, sino por su capacidad para traducirse en desarrollo efectivo y legítimo. Hoy, ambas condiciones están en duda.

Según datos obtenidos por La Segunda vía Ley de Transparencia en febrero de este año, los municipios han utilizado estos recursos en gastos de impacto dispar: desde becas estudiantiles, cámaras de vigilancia y terrenos, hasta buses de lujo, fiestas y eventos deportivos de alto costo. Todo permitido por la ley, que establece que los recursos son de libre disposición – con excepción del pago de deudas – y exige solo reportes ex post, que sólo un tercio de los municipios había realizado a la fecha del reporte. Este diseño institucional genera dos problemas: falta de legitimidad, porque las decisiones sobre estos fondos se toman sin participación ciudadana ni procesos deliberativos que permitan alinear las inversiones con las prioridades reales de las comunidades, y baja efectividad, porque sin esa alineación, el gasto corre el riesgo de fragmentarse, politizarse o directamente desdibujarse. Hoy no existen estándares mínimos de participación, planificación o rendición pública de cuentas para estos recursos. La oportunidad de corregir eso está abierta. Quienes trabajamos en participación ciudadana, sabemos que los procesos bien diseñados, con herramientas digitales accesibles, pueden orientar el gasto hacia donde realmente se necesita y permitir su seguimiento. Si el royalty quiere ser algo más que una inyección de recursos, debe convertirse en una palanca de desarrollo territorial. Eso no ocurrirá sin participación activa, trazabilidad del gasto y responsabilidad en la toma de decisiones.

Lo que está en juego no es solo la eficiencia del gasto. Es también la confianza en las instituciones, el valor de la política pública y la capacidad del Estado de actuar con y para las personas.